

La reconquista internacional del nuevo Berlín: problemas y abusos

Juan RODRÍGUEZ LORES

Universidad Politécnica de Aachen, Alemania.

RESUMEN: La gran operación de restauración de la capitalidad de la Alemania reunificada en Berlín está propiciando una concentración y toma de posiciones estratégicas de capitales, propiedades, empresas, consorcios con vastos intereses internacionales, junto con poblaciones flotantes de obreros extranjeros que ofrecen una de las caras más sombrías del capitalismo tardío. Desde la «cuestión judía» del suelo, por la reivindicación de las antiguas propiedades confiscadas durante la Alemania nazi, hasta la carrera ávida de las grandes multinacionales por asentarse en el corazón de la Europa económica, acompañado de grandes proyectos urbanísticos y arquitectónicos que laven la cara de la siempre inacabada y destruida ciudad, se describe en este artículo la otra cara de la moneda, mostrando el grado de explotación y rapiña que está sufriendo su población laboral en condiciones muy duras de trabajo y bajo condiciones sociales poco conocidas.

Descriptor: Legislación urbanística, Alemania.

«¿Quién construyó Tebas, la de las Siete Puertas?
En los libros se dice que los Reyes.
¿Es que los Reyes transportaron las piedras?
... ¿Quién reconstruyó, una y otra vez, Babilonia?
¿Dónde vivían los albañiles en Lima, la Dorada?
¿A dónde iban los albañiles, cuando terminaron la
Muralla China, por la tarde? ...
¿Quién levantó los Arcos de Triunfo en Roma, la Grande?

... ¿Había en Bizancio, la Admirada, sólo Palacios para
sus habitantes?
... Siempre victorias.
¿Quién preparaba los banquetes?
Siempre grandes hombres.
¿Quién pagaba los gastos?

(Bertolt BRECHT: *Fragen eines lesenden Arbeiters*).

I. ¿A QUIÉN PERTENECE BERLÍN?

¿A quién pertenece el nuevo Berlín? ¿Al poder Público (propietario del futuro distrito gubernamental y de otras instalaciones centrales)? ¿A Sony, Mercedes-Benz u otros grandes capitales (propietarios de partes exquisitas de la ciudad para el comercio, viviendas y servicios de lujo)? Esta respuesta ha sido repetida hasta la saciedad, pero hay que volver a ella, porque encierra trampas ideológicas: reduce la ciudad a sus lugares

centrales; reduce el urbanismo a la configuración de esos lugares, y, como consecuencia, a la estética o también a una técnica para diseñar instalaciones globales al servicio del centralismo (el discurso urbanístico se reduce, una veces, al diseño y la forma; otras, a planes generales y grandes infraestructuras; y siempre, a los corifeos de la arquitectura); finalmente, ofusca la totalidad urbana y, con ella, el urbanismo «cotidiano», técnica del «compromiso» entre fines públicos y los particulares de numerosos agentes de la urbanización, entre los que se encuentran los pequeños y medianos propietarios.

[Recibido: marzo-septiembre, 98]

El Urbanismo abstracto, como estética o como técnica de instalaciones globales, existe en los libros. Es un intento conceptual para establecer una definición unitaria utópica o un marco formal. En cuanto tal, es importante, porque ofrece orientaciones –algunas válidas, otras no– para la práctica. Pero es también equívoco: en cuanto supuesta conceptualización de la práctica, ahonda el abismo entre concepto y realidad. Quien lo absolutize, mistifica la «práctica», que enseña, en parte, lo contrario: que la ciudad es mucho más que sus lugares privilegiados y que el «hacer-ciudad» tiene que ver tanto menos con el plan global o el diseño formal, cuanto más con la «rentabilidad» de la ciudad (suelo, casas, equipamientos, etc. en cuanto «mercancías») y, por tanto, con el sometimiento de belleza o funcionalidad a las exigencias de rentabilidad.

El urbanista de la «práctica cotidiana» se ve obligado a contemplar la ciudad y el urbanismo desde una perspectiva «materialista», que se centra prioritariamente en el complicado enredo de relaciones entre poder público (administración, fines y proyectos públicos, leyes urbanísticas y fiscales, etc.) y poderes particulares (propietarios del suelo, promotores inmobiliarios e instituciones del crédito, medios financieros, entre otros). Son «relaciones» socio-económicas y políticas, que, sin negar el plan ni la estética, relativizan su importancia. Solo ellas son capaces de responder la pregunta sobre la propiedad real y la producción de una ciudad.

2. LA «CUESTIÓN JUDÍA» DEL SUELO

Aquí no es posible tratar la totalidad de las «relaciones» activadas para la reconstrucción del centro Berlínés y de sus alrededores. Me limitaré a la «cuestión judía del suelo», de cierta actualidad gracias a varios factores: a su importancia para el proceso urbanístico, a la influencia internacional hebrea y a la mala conciencia histórica de los alemanes. Si bien esta última es aún sólo germinal. El problema se plantea en publicaciones de divulgación, pero insuficientemente desarrollada en el

ámbito científico o político –signo de que la «cuestión judía» sigue siendo tabú en la sociedad alemana– al tener su origen en un delito histórico innumerable que compromete el presente: la expropiación de ciudadanos alemanes por razones racistas, económicas y políticas. Las insuficiencias de su actualidad, explican por qué la «cuestión judía del suelo» está siendo solucionada insatisfactoriamente.

Los hechos. Hasta 1933, la comunidad judía en Alemania contaba con unos 570.000 miembros, entre ellos fabricantes, comerciantes y propietarios inmobiliarios importantes que, tan sólo en el centro de Berlín, poseían más de 12.000 fincas. Bajo el régimen nazi cientos de miles de judíos fueron exiliados, o internados y, en gran parte, asesinados. Sus propiedades fueron confiscadas o «arificadas» (*Ariseuren*), es decir, cedidas a precios irrisorios a alemanes de supuesta raza aria. Después de la II Guerra Mundial, en la República Federal de Alemania (BRD) una parte de los bienes expropiados fue devuelta o indemnizada. El resto sigue en poder de instituciones públicas, de grandes empresas y cadenas comerciales o de otros. En la República Democrática Alemana (DDR), la mayor parte de los bienes expropiados fue declarada «Propiedad del Pueblo». Su indemnización costaría hoy cientos de millardos de marcos, que faltan en las arcas de un Estado en crisis; su devolución supondría enormes pérdidas públicas, o trastornos considerables en las relaciones de propiedad ya establecidas.

3. DIVERSIDAD DE PROPIETARIOS

Para entender el alcance socio-económico, político y urbanístico de la «cuestión judía del suelo» hay que considerar los diversos «tipos de propietarios» y otros «agentes» implicados en ella. Entre los primeros: «propietarios originarios», «herederos», «propiedades no identificables», «*Ariseuren*», «confiscadores» y «beneficiarios» de reprivatizaciones. Los «agentes» son instituciones públicas y semipúblicas o especuladores integrados en sociedades de naturaleza jurídica. A cada tipo de propietarios o agentes corresponden problemas y conflictos específicos.

Los «propietarios originarios» aún vivos son ya pocos y tienen grandes dificultades en «probar» desde el exilio sus derechos a una propiedad «confiscada», «arificada» o «no identificable». Muchos de ellos renuncian a presentar reclamaciones por miedo a la sociedad alemana. Para los «herederos» la tarea adicional de «probar» la muerte violenta de sus antecesores es casi imposible, porque muchos archivos han desaparecido. De ahí nacen a menudo discordias internas por los derechos de herencia.

El problema de «propiedades no identificables» surge, sobre todo, cuando las antiguas lindes ya no existen en los nuevos trazados urbanos. En caso de identificación pueden plantearse nuevos problemas, como el de los herederos de una finca reconstruida en el Alexanderplatz, a quienes debería corresponder una 3.125-ésima parte de la misma.

Las reclamaciones contra las propiedades «arificadas» parecen inútiles, si los «Ariseuren» son grandes agrupaciones industriales, comerciales o financieras. Son difíciles, si los medianos y pequeños «Ariseuren» se consideran a sí mismos propietarios legítimos, negándose a devolver o a indemnizar, o planteando reclamaciones sobre la propiedad. En ciertos casos intentan chantajear a los propietarios históricos, exigiéndoles compensaciones entre 5% y 10% del valor de mercado del inmueble.

Los «confiscadores» ponen trabas a la aplicación de las nuevas Leyes (*NS-Verfolgten Entschädigungsgesetz* y *Vermögensgesetz*, entre otras), donde se reconocen los derechos de los «propietarios originarios». Por su penuria financiera y sus intereses creados, sean fiscales o de uso, o por la oposición de los detentadores particulares, se oponen a las devoluciones o reducen escandalosamente las indemnizaciones.

La «reprivatización» a funcionarios del régimen, fue una práctica muy extendida en la antigua DDR. Todavía la Ley Modrow de 1990 lo permitía a precios bajísimos de 1 a 2 marcos orientales el metro cuadrado. La práctica es ilegal, al menos desde 1993; pero los municipios orientales han continuado reprivatizando a favor de la clase política o de simples particulares, a precios entre 89

peniques y 8 marcos el m² en zonas urbanas centrales. En total han sido reprivatizadas unas 50.000 fincas, que han debido suponer pérdidas de cientos de millardos de marcos para los municipios. Dada la continuidad personal dentro de la clase dirigente oriental, entre los «beneficiarios» se encuentran muchos «propietarios políticos», propugnadores de Leyes retroactivas que sancionen los antiguos contratos de privatización.

La oposición global contra los propietarios originarios ha provocado la aparición de numerosos «agentes», auténticos cogestores de la propiedad inmobiliaria en Berlín y en otras ciudades. Son de destacar las «Agencias Públicas» alemanas a nivel nacional (*Barov*) y regional (*Larov*). Creadas para la aplicación de las nuevas leyes, mantienen de hecho estancadas la mayoría de las reclamaciones, aparentemente por falta de personal, en realidad por una política obstaculizadora, que tiene su origen en intereses públicos y en la animosidad tradicional de los alemanes contra los judíos. Dos «agencias» norteamericanas, la *Conferece on Jewish Material Claims against Germany* y la *Foreing Claims Settlement Commssion*, han provocado una segunda expoliación: la primera, confiscando propiedades judías a favor de las víctimas del «Holocausto», en caso de no existencia de herederos o de conflictos entre estos; la segunda —creada en 1976 por una Ley del Congreso norteamericano y responsable de las reclamaciones de judíos norteamericanos de origen alemán contra la antigua DDR— concertando indemnizaciones bajísimas según valores de mercado de 1935, menos los destrozos bélicos sufridos por los inmuebles. Los «agentes» particulares son de naturaleza «comercial» (especuladores dedicados a la compra y venta de derechos de propiedad) o «jurídica» (abogados nacionales e internacionales, especializados en los complicados expedientes de devolución o indemnización). La especulación de los primeros y las minutas excesivas de los segundos contribuyen a encarecer los inmuebles.

En contradicción aparente con la situación esbozada, se suelen citar casos «ejemplares», por ejemplo, los herederos de la familia Herman, propietaria hasta los

años 30 de inmuebles para prensa, imprenta y encuadernación en el centro de Berlín, y de otros cerca del *Spittelmarkt*, han vendido por 70 millones de marcos un gran terreno a Debis, filial de Daimler-Benz, para la construcción de un centro comercial con viviendas. La heredera del pintor Liebermann ha vendido el palacete de éste en el *Pariser Platz* por 8 millones a la familia Quandt, heredera, a su vez, del hijo adoptivo del dirigente nazi Goebbel. Una parcela de 600 m² en la *Unter den Linden*, parte de las propiedades del fabricante de tabaco J. Garbaty-Rosenthal, estuvo ocupada por el Ministerio de Comercio Exterior de la antigua DDR, y actualmente por oficinas del Ministerio Federal de Economía de la BRD. Los herederos han sido indemnizados con unos 15 millones de dólares. Son pocos casos extraordinarios, que indican la existencia de una lógica particular al margen de la regla general. Según esa lógica, una solución relativamente fácil es el contrato de venta entre sujetos particulares prominentes, mientras que el Estado prefiere retener los bienes confiscados, recurriendo a la indemnización. En este sentido la «cuestión judía del suelo» puede actuar, sobre todo en las zonas centrales, como una especie de «filtro», que ayude a imponer intereses económicos dominantes, sean particulares o públicos, a la hora de configurar las nuevas relaciones de propiedad.

Resumiendo. La «cuestión judía del suelo», a un nivel general, está comprometiendo la reconstrucción de Berlín con las injusticias del Nazismo. A un nivel particular, está agravando el embrollo urbanístico al fomentar la función contradictoria de la «renta urbana», a través de mecanismos propios. Por una parte, la renta reaparece como motor de inversiones urbanas, pero encareciendo innecesariamente el suelo, debido a los mecanismos de siempre (promoción inmobiliaria, crédito, etc.) y a otros específicos (especulación con los títulos de propiedad, asistencia jurídica intensa, chantajes entre propietarios, etc.); fomentando la transformación de las relaciones de propiedad a favor de intereses políticos y económico-particulares muy poderosos e imponiendo su concepto

centralista de ciudad, que exige, por ejemplo, la reestructuración de barrios populares centrales para usos políticos, terciarios y viviendas de lujo; provocando grandes pérdidas públicas y debilitando aún más el control público sobre la ciudad frente a los intereses particulares, al ser utilizada para el chantaje político de la reprivatización. Por otra parte, la misma renta urbana, al menos indirectamente, obstaculiza las inversiones, debido al encarecimiento especulativo del suelo, a la inseguridad jurídica de los derechos de propiedad y a un torrente de procesos no resueltos. En este sentido existe paralelismo con circunstancias que han paralizado el desarrollo económico general de la antigua DDR en los últimos ocho años (industrialización, vivienda popular, servicios), desviándolo a la producción de usos innecesarios de viviendas de lujo y oficinas vacías en los centros urbanos, centros comerciales gigantescos, depuradoras subutilizadas, entre otros muchos.

4. ¿QUIÉN CONSTRUYE BERLÍN?

¿Quién reconstruye hoy Berlín, la Inacabada, una y otra vez destruída? Siempre la misma respuesta: ¡los Corifeos de la Arquitectura! que deja tantas otras preguntas abiertas: ¿Quién traduce sus fantásticos diseños en procesos técnicos o manuales? ¿Quién acarrea los ladrillos, y los coloca ordenadamente? ¿Quién transporta el cemento y la arena, y hace el mortero? ¿Quién socava un suelo letal, minado por bombas y surcado por corrientes submarinas? ¿Quiénes son los albañiles? ¿Cómo viven? ¿A dónde van por la tarde? ¿Quién paga los gastos? ¿Quién se apropia las ganancias?

La macroeconomía nacional —la de las estadísticas— iba bien, gracias al crecimiento de la exportación, se leía hasta hace poco. Va de nuevo mal, debido a la caída de la exportación, se dice ahora. En todo caso, cualesquiera hayan sido los resultados positivos de la exportación, jamás fueron reinvertidos en el bien común. Por el contrario: las economías de la reproducción cotidiana de los individuos y la sociedad siempre han ido mal, lo dicen las

experiencias: recesión general en la ex República Democrática Alemana, y en «ambas» Alemanias: inmovilidad del mercado interior, empeoramiento de la cuestión de la vivienda popular y de la del suelo, caída en picado del sector de la construcción, aumento imparable del desempleo, etc. Algunos datos sobre el desempleo: más de 4 millones de parados oficiales, en aumento progresivo (150.000 más, el año pasado), es decir, una media del 10% en la vieja República Federal y del 20% en la ex República Democrática. Pero las estadísticas agregadas engañan: en algunas localidades es de más del 50%.

Berlín es la ampliación caricaturesca de la crisis nacional. Después de la soñada «Caída del Muro», la recesión en la ciudad se ha ido agravando continuamente: al retraso industrial y comercial hay que añadir el aumento progresivo de la deuda pública y de la pobreza social. Entre las causas hay que destacar la nueva política de subvenciones federal, la política de desarrollo local y la especulación urbana.

Las subvenciones federales que alimentaron Berlín durante la postguerra han sido canceladas; la administración local, con pocos ingresos propios y, al mismo tiempo, víctima de su propia inflación laboral y de sus costosos proyectos urbanos propagandísticos, languidece bajo el peso de una deuda pública que le obliga a emplear 1/3 de las entradas fiscales para el pago de intereses. La política de desarrollo local, guiada por la ilusión de poder llegar a competir con los grandes centros terciarios nacionales, como Francfort o Düsseldorf, ha sido errónea desde el punto de vista de las capacidades y necesidades de la ciudad, al menos en dos sentidos:

Primero, ha prestado poca atención a los intereses productivos, especialmente industriales, o a las necesidades más urgentes de la población (vivienda, servicios de barrio, etc.) y se ha concentrado, por el contrario, en transformar casi todas las zonas urbanas desde los intereses genéricos de la terciarización, por ejemplo, realizando proyectos «de escaparate», en gran parte inservibles para la población, y fomentando o permitiendo la producción masiva de espacios para supermercados u oficinas, aún vacías en gran parte.

Segundo, tal política y, en el mismo sentido, la ansiada mudanza del Gobierno

federal a Berlín, no sólo han suscitado expectativas especulativas generalizadas, sino también han contribuido objetivamente a entregar la ciudad, como pastel en bandeja, a la especulación con el suelo y los edificios. La especulación urbana, como siempre, se ha concentrado en actividades destructivas: en «vaciar» áreas más o menos céntricas y edificios «apetecibles», para sustituir los viejos usos y usuarios de poca rentabilidad por nuevos de altas rentas. Junto al sector público especulador, destacan otros dos tipos de propietarios: los existentes al tiempo de la «Caída del Muro», interesados en la transformación en restaurantes, boutiques, etc. de los bajos de los edificios; y los foráneos, capitalistas o simples aventureros del «Oeste», interesados en la transformación radical (formas, usos y usuarios) de fincas aisladas o de barrios enteros, a través de un ciclo económico completo: heredar o recuperar o comprar, «vaciar» y vender.

Por regla general, ese ciclo no suele ser controlado políticamente, como es el caso del barrio céntrico de Prenzlberg, declarado «zona de rehabilitación» –la mayor de Europa–. En cuanto tal, su transformación es co-financiada por el Estado que, a cambio, impone obligaciones muy rígidas respecto al reuso y a las ventas, para así proteger a los antiguos habitantes económicamente débiles. Pero en la práctica, las obligaciones están siendo ignoradas por los propietarios, de forma que, por ejemplo, el alquiler en la zona de una simple buhardilla puede alcanzar hasta 5.000 marcos mensuales. El efecto general ha sido un aumento gigantesco –real o en expectativa– de los valores del suelo y de los espacios reconstruidos, con las conocidas secuelas para el empobrecimiento social: desaparición de viviendas baratas y de servicios de barrios públicos, como bibliotecas y jardines de infancia, etc., o también privados, como los ofrecidos por pequeñas empresas locales de reparación, comercio al por menor y producción; expulsión y sustitución de los antiguos habitantes pobres; cuotas bajas de ocupación de los nuevos espacios dedicados a viviendas, comercios y otros servicios de lujo, a oficinas, etc., entre otras.

En resumen, Berlín no sólo sigue siendo una ciudad periférica, sino que se ha

convertido también en una de las más caras del país. Bajo ese cúmulo de condiciones negativas, se ha acelerado la desindustrialización y grandes empresas –Hoechst, Siemens, AEG Mobile Communication, entre otras– han vuelto a abandonar la ciudad o reducido drásticamente su personal.

La nueva pobreza social se refleja de forma preocupante en el empeoramiento de las condiciones de habitabilidad e higiene para la mayoría de la población y también en las estadísticas del paro: Desde la «Caída del Muro», la ciudad ha perdido 325.000 puestos de trabajo; 250.000 personas buscan hoy día empleo, es decir, el 20% de la población activa, la cuota media en la ex Alemania Democrática y la más alta entre las aglomeraciones urbanas de todo el país. El Estado ha creado un simple espejismo al pretender aliviar la situación alimentando a 50.000 parados con trabajos públicos precarios o con cursos de formación profesional. Junto a la economía privada, uno de los agentes importantes del desempleo es el sector público: hasta finales de 1997 desaparecieron en la Administración 25.000 puestos de trabajo; a éstos habrá que añadir unos 20.000 más hasta el año 2001. También las empresas semipúblicas de transportes («BVG») y de energía («Gasag») han eliminado más de 20.000 empleos. Mientras la propaganda oficial y sus ideólogos continúan llamando a Berlín «nueva metrópolis europea entre Oriente y Occidente», otros sociólogos y economistas, obligados por la fuerza de los hechos, están viendo en la ciudad un «Laboratorio del Capitalismo del Desempleo», la «Capital de la Pobreza» o el triunfo del «Americanismo», donde dos culturas opuestas se enfrentan: la «yuppy», del lujo y la ostentación, y la de la llamada «nueva pobreza», con sus viejos síntomas de falta masiva de viviendas populares, mendicidad callejera, bolsas urbanas de indigencia, etc.

5. CRISIS NACIONAL Y EXPLOTACIÓN EN EL SECTOR INMOBILIARIO BERLINÉS

La crisis nacional del sector de la construcción tiene causas económico-

sociales y políticas, como por ejemplo, las carencias del mercado interior y la sustitución de los proyectos sociales públicos por otros pocos al servicio del desarrollo del sector terciario urbano y suburbano y de las infraestructuras territoriales; algunos bajo dirección pública, los más en manos de grandes consorcios privados. Ello conlleva una reestructuración radical de la rama de la construcción, cuyo síntoma esencial es la desaparición progresiva de pequeñas y medianas empresas, de capitales inversores y de puestos de trabajo. Según un informe del *Zentralverband des Deutschen Baugewerbes* (marzo 1998), en 1997 las inversiones en la construcción cayeron un 2,2%; para 1998, se pronostica que desaparecerán 40.000 puestos de trabajo de los 833.000 existentes en la vieja Alemania Federal y otros 30.000 de los 380.000 actuales en la ex Alemania Democrática.

Berlín es un ejemplo extremo de ese desarrollo nacional. Las intensas actividades urbanísticas y constructoras, tanto en la reconstrucción del nuevo centro urbano como en la creación de una red extensa de grandes infraestructuras y servicios privados, suponen enormes inversiones privadas previas que han exigido reestructurar en profundidad la rama de la construcción, con fatales secuelas socio-económicas. Las pequeñas o medianas empresas locales, carentes del capital inversor necesario, han ido desapareciendo: 1.000 en 1996 y otras tantas en 1997. Su lugar ha sido ocupado por empresas foráneas importantes entre las que destacan unas pocas empresas-cuadro, como la *Bundesbaugesellschaft Berlin*, que delegan sus tareas en una infinidad de subempresas que nacen y desaparecen a ritmo acelerado. Estas últimas, aunque a veces tengan su sede aparente en el extranjero, suelen ser simples testaferros o filiales al 100% de grandes empresas nacionales. De hecho, alrededor de la mitad de los capitales «construidos» en la región berlinesa (unos 40 millones DM al año) pertenecen a consorcios de importancia internacional, como Hochtief, Philipp Holzmann, etc. Ha sido un proceso que ha colocado la construcción en Berlín en manos de un empresariado inaprensible que, unido en

muchos casos a promotores potentes en el mercado internacional, como Sony, Mercedes-Benz, etc., y favorecido por las tendencias desreguladoras del Estado y de la Administración local, se ha convertido en un grupo de presión importante, a veces por encima de la Ley, como muestra, por ejemplo, el desorden en el mercado laboral.

Las pocas victorias parciales logradas por el mundo obrero en este siglo (jornada laboral más corta, salarios más altos, mayor seguridad laboral, seguridad social, etc.) parecen estar siendo abolidas bajo las nuevas condiciones laborales retrógradas que tienen una de sus bases en la utilización amplia de mano de obra extranjera (especialmente británica, irlandesa y portuguesa), rigiéndose por el principio de que es más rentable emplear obreros extranjeros mal pagados y desorganizados que alemanes caros y sindicados. Un principio, que encierra además un alto riesgo social, incluidos conflictos étnicos, desde el momento en que el número de desempleados locales en la construcción, 17.000, es muy elevado.

Me limitaré a algunos datos sobre la situación paradigmática en las obras de promoción pública, sacados a la luz por investigaciones oficiales. Según ellas, se viene aplicando una política salarial arbitraria. En lugar del salario mínimo legal de 17 marcos/hora se llegan a pagar sólo 4,08 DM/h; las horas extraordinarias no son pagadas o tan sólo a 12 marcos; en lugar de 4.000 marcos mensuales, lo mínimo reglamentado en caso de semana laboral legal (45 h), se llega a pagar hasta sólo 2.800 marcos brutos en semanas laborales ilegales de 58-68 horas. A veces, el pago del salario es fraccionado en su lugar de cobro, por ejemplo 600 marcos mensuales en Alemania y el resto es entregado en el país de origen del obrero. En caso de marcha anticipada respecto a término del

contrato laboral, el obrero puede ser penalizado con una multa de 150 marcos y pérdida de gratificaciones concertadas. Para ocultar tales irregularidades se suelen emplear métodos criminales, por ejemplo la falsificación de nóminas.

Al caos salarial hay que añadir el desorden en la seguridad laboral. El suelo debajo de Berlín esconde en su interior grandes corrientes de aguas subterráneas y, sobre todo, unas 45.000 toneladas de bombas y otras municiones de la II Guerra Mundial, sin explotar y en avanzado estado de corrosión. Se trata, pues, de uno de los suelos más peligrosos de Europa. Sin embargo, las medidas de seguridad siguen empeorando, por ejemplo: 15 millones de marcos públicos para la desactivación del suelo fueron reducidos en 1997 a 9; cada obrero está obligado a contribuir a las propias medidas de seguridad (casco, guantes, etc.) con 90 marcos mensuales. No es de extrañar que los accidentes laborales, a veces debidos a explosiones involuntarias, superen con mucho la media nacional.

En cuanto a la vida social de los trabajadores, especialmente de los extranjeros, por la tarde, después del trabajo, les espera el hacinamiento hermético en los guetos de barracas. Tal vida asocial suele ser justificada como una elección «voluntaria». Pero ello no es cierto. Es la consecuencia necesaria de la citada explotación salarial, en primer lugar, y de la falta de perspectivas sociales en la emigración, en segundo.

Hace poco, coincidiendo con la aproximación de las elecciones nacionales, el Gobierno federal anunció el ahorro de un millardo y medio de marcos sobre los 20 presupuestados para el nuevo barrio gubernamental. Olvidó citar el alto precio: las condiciones decimonónicas bajo las que trabajan y viven los «constructores» reales de Berlín.